

Informe Ciclo Ruralidad

El lanzamiento de las cátedras de Gerencia Social inicia con el ciclo ruralidad, dando continuidad a las discusiones realizadas en los Cursos de Gerencia Social. En esta ocasión, el tema designado tiene como propósito reflexionar alrededor de los grandes retos del desarrollo y la equidad en un sector con el que tenemos una deuda histórica. En este ciclo se realizaron dos eventos: *Ruralidad y desarrollo sostenible* realizado el 5 de agosto y *La realidad del campo en Antioquia* llevado a cabo el 16 de septiembre.

El primero contó con la participación de José Antonio Ocampo para contextualizar *la Misión para la Transformación del Campo* e indicar los retos de los diferentes actores sociales frente a la ruralidad, incluyendo el papel de las Cajas de Compensación Familiar. En tanto, para el contexto local se contó con Diego Miguel Sierra, consultor y ex secretario de agricultura del departamento de Antioquia, quien realizó un diagnóstico de la problemática agraria en el departamento y los desafíos que se vienen con las nuevas obras de infraestructura en términos sociales, dado que desbordan la capacidad del Estado para responder ante las nuevas demandas.

Sierra señalaba que entre las características de la ruralidad antioqueña se encuentra una tendencia decreciente de la población rural en casi todo el departamento desde finales del s. XX. De esta forma, la pirámide demográfica cambia y se avanza notoriamente en el envejecimiento de la población rural, sumado al enorme desánimo de los jóvenes por la ocupación rural, en particular a las ocupaciones tradicionales, además de las deficiencias en la formación de capital humano. Aunque el expositor destaca que el departamento cuenta con una pequeña esperanza en las escuelas de campo.

Frente al uso del territorio rural, el ponente advertía que se encuentran el espacio productivo, el espacio residencial y el espacio natural de conservación, este último es sobre el que es posible hacer un desarrollo económico sostenible. Respecto a las actividades económicas, el experto mostraba su preocupación por la degradación fruto de la minería aurífera.

Entre las razones para argumentar por qué vamos mal en el uso que estamos haciendo del territorio, se encuentra que el comportamiento de las actividades económicas departamentales en el sector agropecuario representa alrededor del 7% en el contexto nacional. Posterior al uso del territorio, se encuentran las dinámicas de intervención en el territorio como colonización, proyectos estratégicos de infraestructura, cultivos ilícitos,

cambio climático y, demanda y consumo que producen una afectación mayor.

El principal problema del departamento es la deforestación, para Sierra “la condición de deforestación sobre 32.000 hectáreas implica fácilmente el 7% del territorio intervenido productivamente, representando el 1% del total del territorio, que aparentemente queda en bosques protegidos. La proporción parece pequeña, pero comparado con lo productivo, en 10 años de colonización, progresivamente lo que tendremos es una condición que gravita”.

La preocupación respecto a la deforestación obedece al análisis realizado con los trazos de los próximos proyectos de infraestructura como la Troncal del Nordeste desde Porce a Zaragoza y de Zaragoza a Caucasia, sumado a las 4G e Hidroituango, en los que la institucionalidad no está preparada para atender con bienes y servicios el influjo de población aledaña y sus familias.

En la moderación del panel “*Acciones del sector real de la economía en el campo*”, el docente de la Universidad EAFIT, Mauricio Uribe, resalta las experiencias de desarrollo y de construcción de paz desde el sector empresarial en lo local. En ese contexto, las empresas han aprendido no solo a desarrollar estrategias de responsabilidad social, sino a contribuir en forma activa a modificar los efectos perversos de ese sesgo anticampesino en el estilo de desarrollo colombiano.

Por ejemplo, en el caso del grupo Argos el trabajo con las comunidades está orientado al fortalecimiento de capacidades locales y el liderazgo, con el propósito que las comunidades entiendan cuáles son sus derechos, cuáles son las instituciones a las que deberían acudir, cuál es la responsabilidad de la institucionalidad desde lo público con esas poblaciones, pero mientras se hace este proceso de concientización, se han llevado ciertos servicios públicos que debería proveer el Estado. De esta manera, Argos se dirige hacia una promesa de valor con las comunidades: ser aliados de desarrollo y buenos vecinos.

En el caso de Asocolflores, Marcos Alberto Ossa Ramírez reseñaba que desde el sector privado se requiere la capacidad de generar políticas públicas para transformar comunidades y, al transformar comunidades, por ende, se cambia el panorama del campo. Un criterio fundamental es el ordenamiento y el desarrollo territorial, allí Asocolflores tiene unos aliados estratégicos como Cornaré, en un territorio donde todos puedan estar, pero de una manera organizada y coordinada.

Respecto a la misión rural en el capítulo de *Cerrar las brechas sociales con enfoque de derechos*, Asocolflores interviene en una estrategia de solidaridad en el Oriente Antioqueño, gracias al aporte entre el 1 y 5% del salario de los trabajadores de la floricultura se generaron otros empleos, porque se partía de la premisa que quienes tienen empleo apoyen a quienes no lo tienen, para tal fin se definieron territorios con incidencia de grupos armados en el cordón que comprende Abejorral y que termina en la Pintada.

En este territorio, Asocolflores empezó a recuperar la vocación agrícola de cultivadores de moras y fresas, generándoles una nueva confianza, una nueva esperanza de vida, con capacitaciones en temas administrativos y de costos, aprovechando capacidades instaladas como una asociación, y posteriormente unos recursos del Observatorio de Paz de la Unión Europea.

Frente los retos de la ruralidad, Ossa indicaba que la gente ya no quiere trabajar en el campo, debido a las políticas de asistencialismo para población desplazada, que se han convertido en una competencia para las empresas agroindustriales. Como resultado, la mano de obra no existe, porque las personas no quieren trabajar, dada esa condición de beneficio que les otorga el Estado.

Otro de los casos expuestos fue Augura, su presidente, Juan Camilo Restrepo Gómez, explicaba cómo desde el sector bananero se han promovido acciones conjuntas con el gobierno nacional, con el fin de apostar por el desarrollo integral del Urabá, siguiendo la máxima del empresario Gonzalo Mejía “Urabá la mejor esquina de América”, como las obras de infraestructura para la región: la vía al mar y el aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, o acompañamientos a nuevos proyectos como Puerto Antioquia, o la Clínica Panamericana, erigido de la mano de Comfama y el gobierno departamental.

En la disertación de Alejandro Arbeláez sobre conflicto y posconflicto, se iniciaba con la afirmación que Colombia es un país rural con una población urbana en un contexto crecimiento poblacional con necesidades alimentarias, entonces el académico planteaba ¿por qué enfocarnos sólo en la agricultura tradicional, en lugar de encauzarnos hacia la agroindustria para recoger la vocación inicial y aprovechar las ventajas comparativas para enfocarnos en la agroindustria?

Arbeláez indicaba en una radiografía rápida del sector que el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios con un Gini rural de 0,88. En el campo se da un 60% de informalidad laboral, proporción similar al área urbana, con 83% de la población en régimen subsidiado, 14% de

analfabetismo y con un 55% de los campesinos, quienes nunca han recibido asistencia técnica sobre las oportunidades provenientes de los diferentes TLC.

En los retos del posconflicto, si se firma la paz y se desmovilizan las Farc, el Estado tiene que recuperar el control territorial y parte del error de la desmovilización de los paramilitares es que no se alcanzó ese control territorial y parte de ese territorio fue copado por las FARC.

Para el académico, en el corto plazo se requieren las intervenciones de urgencia, como puentes, centros de salud, las escuelas para tener credibilidad en el posconflicto, en aras de obtener victorias tempranas con intervenciones físicas y sociales muy concretas y, por supuesto, llenar institucionalmente vacíos y legados dejados por FARC, como la cultura de la ilegalidad, el no respeto por el Estado, no solo está en las FARC sino en algunas poblaciones, para ellos se requiere revertir ese legado.

Posteriormente, Julia Matilde Restrepo de PIC Colombia expuso la labor de la empresa en un contexto de conflicto como Santo Domingo en la década de los 90, que afectó la confianza en las autoridades y la industria. Por ello, desde PIC se ha tenido una gestión de la cultura, creando un ambiente que le permita a la comunidad recobrar confianza y, a su vez, creer en la empresa como un generador de escenarios de solidaridad y apoyo. PIC Colombia, a través de la integración interinstitucional con los entes que intervienen en la zona ha trabajado de forma articulada para así construir tejido social (apoyo de la comunidad) e inclusión social (generación de empleo), lo que ha llevado a ganarse la confianza de la comunidad, pues cuenta con nosotros como aliado y patrón de integración y generador de calidad de vida y ha aportado al llevarle a los habitantes la esperanza social.

Para cerrar la jornada, José Antonio Ocampo presentó la *Misión para la Transformación del Campo*, señalando que el punto de partida es el enfoque territorial participativo, en un país tan complejo como Colombia, pero sobre todo en un proceso de construcción de paz, hay que comenzar con las comunidades mismas; por tanto, las comunidades tienen que ser objeto de las políticas mismas y los actores de su propio desarrollo, sino así no se van a obtener los resultados positivos esperados.

Para Ocampo, el desarrollo ha sido desbalanceado entre el campo y la ciudad, existen grandes desigualdades al interior de la propia zona rural, tanto en un mismo territorio o cuando se comparan distintas zonas rurales de Colombia, desde donde las brechas son marginales como el valle geográfico del río Cauca, hasta las que tienen altísimas diferencias en otras partes de Colombia.

La provisión de servicios sociales en el campo presenta problemas de calidad en educación y salud, en particular en la población dispersa, como resultado de un sistema de protección social fragmentando por el vínculo con el empleo formal. En particular, el sistema pensional es casi inexistente y hay poco acceso a Cajas de Compensación Familiar. Actualmente funcionan mejor los mecanismos de promoción social, que son básicamente los servicios que presta el Departamento de la Prosperidad Social para un creciente grupo de la población más pobre de Colombia.

Otro problema señalado por el experto es la limitada asociatividad, pues para los pequeños productores estaría mejor si se asocian, ya sea en forma de cooperativas u otras formas de organización de productores, puesto que las posibilidades de avance bajo estas modalidades de agrupación son mayores que como trabajadores individuales que van a depender de unos canales de comercialización que son imperfectos en Colombia.

En este sentido, Ocampo citaba como claves del éxito: 1) El acompañamiento prolongado de muchos años en el cual se trabaje con un grupo de productores para sacarlos adelante. 2) La asociatividad como segunda clave. 3) La integralidad de las intervenciones, no solo tierra, otras cosas como la asistencia técnica, crédito, acceso a canales de comercialización apropiados entre otros. 4) La participación efectiva de las comunidades locales, 5) la visión urbana regional, la forma como uno puede abastecer a los pequeños productores con el abastecimiento de las ciudades. 6) La generación de confianza entre las partes. 7) La confluencia de actores y programas y 8) La orientación hacia el mercado, porque esto no funciona sino hay un mecanismo para llegar al mercado por parte de los pequeños productores.

Frente a las Cajas de Compensación Familiar, el tipo de servicios que mejor pueden darse en las zonas rurales son educación, salud, vivienda, cuota monetaria, microcrédito, entre otras y, además, si se deben hacer modelos diferentes de prestación de servicios, por ejemplo, sistemas móviles en vez de presencia continua en las zonas rurales. Si debe haber una categoría especial de trabajador rural para poder incorporar a los trabajadores independientes.

En la segunda conferencia del ciclo, *La realidad del campo en Antioquia*, inició con la presentación de Jorge Giraldo, centrándose en el estado de las negociaciones en La Habana en el tema agrario, es decir, los temas 1 y 4 de la agenda oficial. El primer asunto importante para señalar es que 3 de 4 colombianos creen que aun dándose el acuerdo, las concesiones que se hagan a las Farc deben ser mínimas. Dado este ambiente, el punto uno es importante, independiente de la posición frente al Gobierno y las Farc, el

hecho es que ese acuerdo se va a producir y el peor escena posible para los empresarios, fundaciones o comunidad civil es desconocer los escenarios previsibles a futuro.

El escenario por excelencia de implementación de los acuerdos va a ser el rural, puesto que el 100% de las decisiones de la Habana están relacionadas con el campo, especialmente en algunas regiones, incluso es previsible saber cuáles pueden ser algunas de ellas. La agenda que se estableció en La Habana hace casi cuatro años, es un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta es la razón por la cual estos acuerdos son distintos a los de los grupos paramilitares de hace 10 o 26 años con las organizaciones guerrilleras. Esta prevista una fase de terminación de conflicto y otra de construcción de una paz estable y duradera.

Este acuerdo se vinculó con dos asuntos sensibles en Antioquia que corresponden a las minas antipersona, utilizadas para proteger los cultivos y los laboratorios. Antioquia es el departamento con más eventos causados por minas o de munición sin explotar, casi la mitad de los eventos se presenta en Antioquia, lo que demuestra la importancia de este acuerdo en el departamento. El segundo es el de parques naturales, el acuerdo prevé una delimitación o delimitación de los parques nacionales que tienen que ver con los usos de la tierra, después de que se construya el sistema de registro catastral.

Finalmente, un tema de interés para las fundaciones empresariales es la relación entre desarrollo y la política de construcción de paz. Este es un asunto que el gobierno no tiene claro, qué parte del Plan de Desarrollo o de las políticas sociales del país se traslapa con la implementación de los acuerdos que corresponde a la política de posconflicto. Todo lo que se va a hacer en estas zonas es construcción de paz o simplemente es parte de las obligaciones que tienen el gobierno nacional de proveer unos bienes básicos de proveer a esa población y a esos territorios.

Como señalaba el experto, este acuerdo se va a firmar en un momento de descenso en el crecimiento económico, devaluación del peso, conflictos comerciales y políticos. Finalmente, una frase reiterativa es que el país no se puede dar el lujo de fracasar en la implementación de estos acuerdos.

Por su parte, Mauricio Uribe López abordó cuatro puntos: la relación ruralidad y guerra, características del estilo de Desarrollo en Colombia, sesgo Anti-campesino, algunas consideraciones de construcción de Paz en el campo colombiano. Uno de los mensajes más importantes de la misión rural, ese ese mensaje sobre la continuidad entre rural y urbano, esa distinción ni siquiera opera bien en las estadísticas. Los vínculos entre la

ruralidad y los centros poblados urbanos son muy estrechos, no podemos hablar del campo colombiano o de la ruralidad sin dar una mirada al contexto global de nuestra economía política.

Para el académico, entre los problemas del sesgo anticampesino se encuentran el declive de la institucionalidad rural; de hecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido concentrando parte de las funciones y gastos, adicionalmente a que se perdió la capacidad de reacción de instituciones especializadas que, con todos sus problemas, tenían en un momento determinado el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, y el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, instituciones que acompañaban al campesino y hoy no están; sumado a otra de las tragedias del campo es que no hay suficiente mercado, faltan más empresarios y un mercado de tierras dinámico, pero tampoco hay suficiente Estado.

En el caso de Banacol, Juan Felipe Laverde expuso el modelo de negocios inclusivos impulsado por su organización, en aras de mejorar la calidad de vida de personas de bajos ingresos de las zonas de influencia de la agroindustria bananera. De esta manera, la estrategia conjunta de las comercializadoras y fundaciones fue servir de ancla con toda la cadena vertical como factor de competitividad; para ello, se dispuso de toda la logística para que los pequeños pudieran exportar, les entregamos los insumos, incluso las fábricas de cartón les entregan las cajas.

Cualquier estrategia de superación de la pobreza, según Laverde, debe permitir un acceso amplio y generalizado a los mercados, acompañada de los medios para permitirlo, este es un tecnicismo garantizado: el acceso al mercado, pues la mayoría de los productos del sector agropecuario emprenden al revés, comienzan empoderando asociaciones y fortaleciéndolas tecnológicamente, pero cuando empiezan a comercializarlo con acceso a algunos bienes, no hay mercado. Por tal motivo, el sector bananero ayudó a que el producto fuera sostenible y esa fue la apuesta de cada asociación con sus plataneros.

Como mensaje final, Laverde invitó indicó “en el sector bananero y platanero confluyen desmovilizados y desplazados, hay que creer en ellos. Para este grupo de personas lo más importante es la estabilidad económica y familiar. Sin embargo, desde que exista un acompañamiento social adecuado, las empresas les garanticen estabilidad en su mercado y exista una apuesta de región, es posible sacarlos adelante”.

Finalmente, el otro caso expuesto fue Nutresa con Carlos Ignacio Sánchez quien expuso el modelo de desarrollo sostenible, en el que se incluyen iniciativas de acompañamiento técnico y social en Montes de María, allí se

tiene una alianza productiva para el establecimiento, mantenimiento y comercialización de cacao que beneficia a pequeños productores de la subregión centro. Este mismo acompañamiento para el cacao se da en los municipios de Unguía, Riosucio, Acandí y Chocó, mediante un plan que indique las acciones necesarias para el fortalecimiento organizativo, productivo y empresarial de cada uno de dichos grupos. Igualmente, a la red de productores de ajonjolí en Montes de María, en la comunidad de Sincelejito, se les presta soporte a los niños en educación a través de escuelas acondicionadas.

Para la consecución de este fin, cada tres meses se visitan las asociaciones buscando mejorar el soporte en costos, negociación, planeación de proyectos y administración de recursos. Entre más producción, se puede obtener un precio más rentable. Allí se validan las tareas y se asignan recursos para saber cómo se están asignando y haciendo los trabajos.